

La utopía de una vivienda digna - Levante de Castelló - 13/01/2019

DESDE LA UNIVERSITAT

La utopía de una vivienda digna

► La PAH lucha para que aprueben su propuesta de ley ► La UE critica el incumplimiento del derecho constitucional



IRENE MURIANA CASTELLÓ

■ Carmen González López, nombre ficticio por petición de la afectada, tiene 54 años. Es autónoma, soltera y vive con su madre discapacitada. A partir de 2012, su vida comenzó a torcerse. Tenía un negocio y decidió hacer una rehipoteca. El director de una sucursal bancaria le dijo que firmara un seguro de cuota única de 5.000 euros. Esta cantidad se sumaba a la que ya tenía que desembolsar por la hipoteca. Al principio se negó, pero acabó accediendo. «Fui a hablar con el banco porque no podía pagarlo todo y necesitaba una solución, pero no me hacían caso», explica.

Frente a estos problemas habitacionales, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha propuesto una ley de vivienda para terminar con las dificultades de hacer frente al pago de la hipoteca. Sin embargo, la Mesa del Congreso, con el apoyo del Partido Popular (PP) y Ciudadanos, bloqueó en marzo pasado la tramitación parlamentaria de la ley, de acuerdo con el criterio del entonces Gobierno de Mariano Rajoy.

En 2017 hubo 22.330 desahucios por impago de la hipoteca, frente a los 35.666 por alquiler, según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En otras palabras, se produjeron cuatro desahucios por hora. La PAH quiere terminar con esto, pero se encuentra con obstáculos en el camino, como el «no» de los partidos políticos.

La iniciativa bloqueada incluía medidas destinadas a pinchar la burbuja del alquiler, reforzar el parque público de pisos para realojar a los afectados en viviendas vacías que pertenecen a los bancos, combatir la pobreza energética para que todos tengan acceso a unos suministros básicos, implantar la dación en pago retroactiva, eliminar las cláusulas abusivas y terminar con los desahucios.

El PP bloquea una solución
El Gobierno tenía la última palabra. Si consideraba que su aprobación suponía una reducción de los ingresos o un incremento de los gastos que podía bloquear la iniciativa. Esto último es lo que ocurrió. El anterior



Una protesta contra los desahucios en Castelló. CARMEN RIPOLLÉS

La solución pasa por impedir las cláusulas abusivas, implantar la dación en pago y eliminar los desahucios

Los bancos, a través de fondos buitres suben los precios para que los inquilinos se vayan sin ningún derecho

Ejecutivo, presidido por Mariano Rajoy, calculó que tendría un sobrecoste aproximado de unos 90.000 millones de euros para la próxima década.

Sin embargo, no todos piensan lo mismo. Daniel García Blanco, coordinador de la Asamblea de Vivienda Digna para Todas las Personas del movimiento Actuar Todos por la Dignidad (ATD) Cuarto Mundo, considera que «el tema económico es una mera excusa. No es un problema de falta de dinero, sino que no se quiere cabrear a los que lo tie-

nen». Además, hace hincapién que hay muchas alternativas de acceso a la vivienda que no supondrían un gran desembolso, como la utilización de pisos vacíos.

Eduardo Gutiérrez, coordinador del Comité de Vivienda de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES), va mucho más allá y sostiene que «el trasfondo de vetar esta ley es por un motivo ideológico. Los partidos políticos no tienen ganas de debatir sobre derechos».

La UE nos recrimina

Advierte también Eduardo Gutiérrez de que las políticas de vivienda de la Unión Europea están a «años luz» de la española. Explica que cuando se intenta debatir sobre el establecimiento de nuevas leyes habitacionales la gente cree que «nos hemos vuelto locos». Y recuerda que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha denunciado la insuficiente protección del derecho a la vivienda en España.

Hay otros muchos más críticos con el poder. «El Congreso no aprueba esta ley porque no favorece a la banca. El Gobierno, da igual el que sea, ha trabajado para que el problema de los desahucios cambie, pero a peor»,

denuncia Martina Solís, voluntaria de la Asociación de Afectados por las Hipotecas Basura de la Financiera Unión de Créditos Inmobiliarios (Asociación hBU-CI) y de la Asociación de Hipotecados Activos. Además, afirma que es muy difícil valorar ahora la vivienda después de que se devaluara tanto durante la crisis.

Desde la PAH de Castelló, María Jesús Garrido lamenta que los servicios sociales, que deberían proteger a las personas afectadas, no tienen recursos ni voluntad política para hacerlo. «Es más fácil desalojar a un okupa que dar solución al problema», manifiesta. Además, critica la labor de la banca: «Todos sus inmuebles están en manos de los fondos buitres y ellos no se andan con miramientos. El negocio es el dinero y el Estado legisla a través de él».

Los fondos de capital de riesgo, más conocidos como fondos buitres, son empresas privadas que invierten dinero en propiedades que se encuentran cercanas a la quiebra. Su modus operandi es sencillo: comprar barato para vender luego más caro. La invasión de estas sociedades en el campo inmobiliario fue en medio de la crisis económica en 2012 y 2013. Llegaron para quedarse, ya que todavía tienen un papel muy destacado en el mer-

cado español, no solo en el inmobiliario, sino también en otros sectores como la sanidad privada.

Aumento de precios

Muchas de las viviendas vendidas a estos fondos buitres están aumentando sus precios. Esto hace que aparezcan nuevas modalidades de desahucio: los encubiertos. «Al finalizar el contrato, el precio del alquiler sube. El inquilino no puede pagarlo y tiene que marcharse. No se considera desahucio, sino el fin del contrato, pero es lo mismo: se expulsa a alguien de una casa por no poder abonar el dinero», explica Daniel García Blanco, de la Asamblea de Vivienda Digna para Todas las Personas. También añade que se aprueban leyes o se refuerzan algunas que «penalizan, castigan y criminalizan» a los que no tienen una vivienda y buscan otras alternativas, como la «okupación».

Mientras tanto, Carmen González López continúa luchando por tener un techo bajo el que vivir. «Ahora estoy en mi casa, pero en mayo de 2020 mi madre y yo tendremos que irnos. Estoy intentando negociar con el banco para pagar un alquiler social», aclara. Ella sigue acudiendo a las manifestaciones en defensa de una vivienda digna.